

Cincuenta Años de Vida y Política Universitaria (1928-1978)

Por Víctor GARCIA HOZ

1. Los años veinte. Dos Reales Decretos y un problema político.
2. La República. El ensayo de la Facultad de Filosofía y Letras.
3. Las asociaciones estudiantiles.
4. Los primeros años de Franco. El Consejo de Investigaciones Científicas y la Ley de Ordenación Universitaria de 1943.
5. El quiebro de la política universitaria. Nuevas perturbaciones.
6. Las enseñanzas técnicas.
7. La masificación de la Universidad.
8. La Ley General de Educación de 1970.
9. La inquietud de los profesores.
10. La transición.

En estos tiempos de transición y reforma, tal vez no sea ocioso echar una mirada, un tanto larga para ser de actualidad y demasiado corta para ser historia, a las peripecias de la vida y la política universitarias. Entre el mayo de 1928 en que un Decreto de la Dictadura de Primo de Rivera sirvió de pretexto a las primeras conmociones serias de la Universidad española y el mayo de 1978 en que la institución universitaria se halla en una situación de incertidumbre frente a inevitables reformas, muchas cosas han pasado en la Universidad, cuyo conocimiento tal vez pueda ser tenido en cuenta a la hora de enjuiciar situaciones y elegir nuevos caminos.

1. LOS AÑOS VEINTE. DOS REALES DECRETOS Y UN PROBLEMA POLITICO

La universidad española alcanzó en el primer cuarto de este siglo un cierto decoro. Figuras como Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, Cajal y Ferran, honrarían a cualquier universidad. Pero pronto iba a retoñar una enfermedad que ya aquejó a la universidad española en el siglo XIX: La introducción de la política de partido en la función de los problemas universitarios.

Extraordinariamente significativo es el hecho que aconteció dos años antes de la instauración de la Dictadura. Desde que se organizó la Institución Libre de Enseñanza venía batallando por la autonomía de la Universidad. En el gobierno que se formó el 13 de agosto de 1921 como consecuencia de los desastres políticos y militares que culminaron en la retirada de Anual, gobierno que fue presidido por Antonio Maura, ocupó la

cartera de Instrucción Pública don César Silió. Al mes de la constitución del gobierno, el 9 de septiembre de 1921 se promulgó un decreto por el cual se concedía la autonomía a las universidades españolas. En el artículo 1.º del mencionado decreto se estableció textualmente que «la universidad, como institución pública con organización y vida corporativa autónoma, se regirá por su correspondiente Estatuto». A continuación se aprueban los Estatutos de las distintas universidades españolas que habían sido elaborados de acuerdo con un Decreto de 21 de mayo de 1919 emanado también de un gobierno Maura.

Parecía que el Decreto de Silió venía a colmar los deseos de los universitarios que aspiraban a la autonomía para la universidad. Pero, inexplicablemente, en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y en *El Sol*, periódico que por entonces se hallaba influido por intelectuales de signo liberal izquierdista, se desató una campaña contra el Decreto del señor Silió poniendo como pretexto que la universidad española no estaba preparada para la autonomía y que su concesión iba a acarrear la ruina de la institución universitaria.

Frente al coro de voces que se oponía al Decreto de autonomía se alzaron también quienes viniendo del campo de las «derechas» apoyaron el Decreto; pero sobre todo es digno de mencionar el artículo de don Santiago Ramón y Cajal que quince años antes había obtenido el Premio Nobel de Medicina y que a la sazón presidía la Junta para ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En él venía a decir, con cierta reticencia ciertamente, que no tenía sentido protestar por la concesión de algo, la autonomía universitaria, que se venía pidiendo reiteradamente. Lo que la universidad había de hacer era demostrar que sabía utilizar eficazmente la autonomía que se le otorgaba.

Lo que acontecía en el fondo es que la autonomía era algo concedido por un gobierno conservador y de él no podían las izquierdas aceptar nada. La mentalidad de partido político venía a inutilizar una de las más claras posibilidades que a la universidad española se le ofrecieron. Pocos meses después, el 7 de marzo de 1922, el gobierno de Antonio Maura terminaba y la autonomía de la universidad una vez más se fue al agua. Más que la política, la politiquería había entrado de nuevo en la Universidad para matar cualquier iniciativa inteligente.

La tranquilidad material que a toda España trajo la Dictadura alcanzó también a la universidad que vivió tranquila, sin pena ni gloria digamos sin ánimo peyorativo, hasta la publicación del Real Decreto Ley de 9 de mayo de 1928 en uno de cuyos artículos, el 53, se abría una pequeña puerta a la libertad de enseñanza en el nivel universitario ya que el mencionado artículo establece «los alumnos que hubiesen realizado sus estudios asistiendo habitualmente durante los años exigidos como mínimo de escolaridad, a Centros de Estudios superiores que por más de veinte años de existencia que hayan acreditado notoriamente su capacidad científica y pedagógica, realizaran sus exámenes de fin de curso en idéntica forma que los que hubiesen seguido los cursos normales en la Universidad, siendo examinados en ella por dos profesores de aquéllos, presididos por un catedrático de la Facultad en que estuviesen matriculados». Los Centros Superiores de El Escorial, regido por Agustinos, y de Deusto, regido por Jesuitas, se acogieron a esta posibilidad y ello fue motivo de que se iniciaran las primeras algaradas estudiantiles que habían de continuar hasta el fin de la Dictadura, de la Monarquía y durante la República.

El mencionado Real Decreto Ley, suscrito por Callejo, pretendía iniciar la reforma universitaria pero en unos términos muy modestos, acometiéndola «parcialmente... en el aspecto vital y esencialísimo de los estudios y enseñanzas que en la Universidad pueden darse por creerlo más viable que presentar un proyecto de gran traza que abarcara la integridad de la reforma, pero que acaso por su misma amplitud no lograra salir de la estéril región de los buenos propósitos». De nuevo el fantasma de la libertad de enseñanza asustaba a los que, llamándose liberales no entienden otro modo de promocionar la educación, sino el monopolio docente del Estado.

Aunque sea como un inciso, recordemos que el 17 de mayo de 1927 se creó el Patronato de la Ciudad Universitaria presidido y alentado por el monarca que ha hecho posible

el que la Universidad de Madrid pueda poseer un campus y unas instalaciones acordes con las exigencias de una Universidad moderna.

La idea de la ciudad Universitaria ha sido una de las pocas que ha gozado de continuidad. Se delimitaron los terrenos y se formuló el primer proyecto de Ciudad Universitaria en tiempo de la Monarquía, pero fue ya la República quien llevó al nuevo campus las enseñanzas comenzando por la nueva Facultad de Filosofía y Letras que inició sus actividades en la Ciudad Universitaria en el año 1933. Los sucesivos gobiernos de Franco han ido instalando nuevas enseñanzas hasta saturar las posibilidades de los terrenos. En 1973 aparte del campus de la Ciudad Universitaria la Universidad de Madrid tiene otro campus funcionando en Somosaguas en las afueras de Madrid y le ha sido asignado un tercer campus en Alcalá de Henares.

La iniciativa de la Ciudad Universitaria de Madrid ha sido imitada por otras Universidades y en la actualidad puede considerarse que todas las Universidades españolas tienen sus instalaciones en una «Ciudad Universitaria» de mayor o menor amplitud.

En las algaradas estudiantiles ya se notaba también la misma división ideológica que se observó al hablar de la reacción frente al Decreto de autonomía de Silió. Por el año veintiocho ya hacía tiempo que se habían organizado los Estudiantes Católicos por una parte y por otra la FUE (Federación Universitaria Escolar) oficialmente de carácter neutro pero que en realidad se vio enseguida dominada por influencias políticas de izquierda.

Personalmente puedo hablar de que con ocasión de estas algaradas estudiantiles recibí la primera información sobre las dos tendencias predominantes en la vida universitaria. En medio de una situación efervescente de gritos y protestas contra el hecho de que se fueran a conceder títulos en Centros no estatales alguien me hizo una pregunta ingenua ¿te fijas en quiénes son los que protestan? Los que incitaban a la protesta eran en su gran mayoría «neutros». De nuevo un posible brote de libertad de enseñanza se secaba antes de nacer.

Al gobierno de Primo de Rivera apenas le quedaba ya poco más de un año y medio de vida. Los dos siguientes gobiernos de la Monarquía pudieron ver una Universidad alborotada en la que se dieron renuncias a sus cátedras de varios profesores, disturbios estudiantiles, cierre de algunas universidades y empezó la zarabanda de ministros de Instrucción Pública que había de durar toda la República. Dimitido Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, dos días más tarde se formó el gobierno del general Berenguer en el cual ocupó la cartera de Instrucción Pública el Duque de Alba que poco tiempo después fue sustituido por don Elías Tormo y Monzó, erudito historiador del Arte pero con pocas posibilidades políticas, que un año después fue sustituido por otro catedrático, Gascón y Marín, cuya gestión ministerial no llegó a dos meses. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República española y en su primer gobierno provisional el ministro de Instrucción Pública fue don Marcelino Domingo.

2. LA REPUBLICA.—EL ENSAYO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

No se si porque Marcelino Domingo tenía el título de maestro de primera Enseñanza o porque ocupaba la Dirección General correspondiente a este nivel Rodolfo Llopis, un socialista de gran capacidad política, o porque la «instrucción popular» fuera la preocupación educativa más acorde con la nueva política el hecho es que la acción de la República en el campo educativo se proyectó principalmente en el nivel primero de educación, es decir, en la enseñanza primaria. Muy significativo es el hecho de que a poco de instaurarse la República se organizó en el Ateneo de Madrid una exposición de los trabajos de alumnos de una escuela primaria rural bajo el slogan «lo primero es lo primero».

La mayor preocupación por la enseñanza primaria no quiere decir que la República no proyectara su acción política sobre la Universidad. Por primera vez desde que las Universidades se convirtieron en instituciones estatales, algunas Facultades universitarias iban a gozar de autonomía. En virtud del Decreto de 11 de septiembre de 1931 «como ensayo de futuras reformas de la Universidad se establece un régimen de excepción a

favor de las Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades de Madrid y Barcelona, únicas de las de su clase que tienen completas sus secciones y en las que es posible realizar la experiencia pedagógica que el Ministerio desea acometer».

El régimen de excepción consistía en que se concedió a estas Facultades autonomía para organizar sus propios planes de estudios. En este régimen de autonomía se organizó el que se denominó «Plan Morente» en la Facultad de Madrid. No sólo la Facultad tenía libertad para establecer sus propias enseñanzas, sino que los catedráticos tenían igualmente libertad para enseñar sus propias asignaturas y otras que «juzgue conocer y desee exponer aunque se halle a cargo oficialmente de otro colega». Los estudiantes tienen o tenían igualmente libertad para elegir sus propias materias de acuerdo con el tipo de Licenciatura que eligieran e incluso podían confeccionar su propio plan de estudios previa aprobación por la Facultad. Se suprimían los exámenes por asignaturas y únicamente había de realizarse una primera prueba de conjunto común para todas las secciones, en el momento en que cada estudiante se sintiera en disposición para realizarla, y una prueba final específica de cada sección. El acceso a la Facultad se efectuaba mediante unos estudios preparatorios durante un curso o bien a través de un examen de ingreso.

El régimen especial para Madrid y Barcelona se estableció, según se dijo antes, «como ensayo de futuras reformas de la Universidad». En realidad esta fue una de las iniciativas más interesantes de la Universidad española. Tengo entendido que se extendió después a alguna otra Universidad, tal la de Salamanca.

Por los estudiantes, fue bien recibido así como por gran parte de los profesores. Era una experiencia interesante y fácil por el momento para los alumnos porque no se veían obligados ni a la asistencia a clase ni a la utilización de tales o cuáles libros de texto. Tal vez había que añadir a esta libertad la sensación de facilidad que presentaban unos estudios de los cuáles no había que rendir examen al final del curso. Sin embargo, pronto se vió que el «Plan Morente» no tenía nada de fácil. Los primeros exámenes intermedios, así se llamaban en el argot estudiantil la primer prueba de conjunto, resultaba extraordinariamente difíciles y mucho más lo eran todavía las pruebas finales para la obtención de la Licenciatura. Por lo que a la Licenciatura en Pedagogía se refiere la primera promoción estuvo constituida por dos Licenciados aunque había más de veinte en condiciones legales para poder presentarse a la prueba final. Pero la prueba final infundía mucho respeto.

Vuelvo a insistir que el ensayo que acaba de referirse fue muy interesante, quizá el más interesante de la Universidad española en el siglo XX. Pero ha de entenderse que surgió no como resultado de una particular política educativa, de la República en este caso, sino más bien como resultado del espíritu de continuidad que, cuando aparece en la política educativa, siempre produce resultados positivos. En el preámbulo del título segundo del Decreto de 15 de septiembre en el cual se establece el tantas veces mencionado régimen especial se sigue en lo fundamental el estatuto aprobado después de larga y madura discusión por la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en 1922, recogiendo también algunas de las ideas expuestas en el Estatuto General de la Enseñanza Universitaria aprobado por Real Decreto de 25 de septiembre de 1930. El Plan Morente sólo tuvo cinco años de vigencia. Establecido en 1931 la vida universitaria quedó cortada por el Alzamiento Nacional en 1936. Cuando se reanudó la vida universitaria en 1939, el «Plan Morente» era ya «plan antiguo». Una nueva política educativa había empezado.

3. LAS ASOCIACIONES ESTUDIANTILES

Tal vez el fenómeno más interesante de la vida universitaria de los años 23 al 36 sea el nacimiento y desarrollo de las Asociaciones estudiantiles. Cuando comenzó el siglo estaba vigente una disposición ministerial según la cual los alumnos de la Universidad «deberían sentarse siempre en el sitio correspondiente al número de su matrícula» y... «no podrán hacer preguntas al profesor». Desde esta pintoresca situación, se refleja el miedo de la autoridad a posibles perturbaciones provenientes de los alumnos, hay un enorme salto hasta la situación de la Universidad de los años 30 en la que los estudian-

tes tenían representación en el claustro; y hay una distancia casi estelar hasta los años 70 en los que la participación «paritaria» sale a relucir una y otra vez.

La conciencia de grupo se creó en la mente de los estudiantes a partir de los años 20 junto al deseo de participación no sólo en las actividades sino también en el gobierno de la vida universitaria es un elemento que permanecerá vivo y actuante a través de todas las polémicas y las situaciones universitarias.

La conmoción que para la vida española significó el Alzamiento Nacional alcanzó, como es lógico a la Universidad. No sólo porque la Universidad es un elemento en la sociedad en que vive sino porque también los estudiantes desempeñaron un importante papel en la guerra española. Sin exageración puede afirmarse que los estudiantes y los jóvenes recién licenciados constituyeron la gran masa de la oficialidad que combatió en el ejército de Franco. Pero el problema estudiantil tiene suficiente importancia para que se le dedique un estudio especial. Quede aquí apuntado solamente.

4. EL CONSEJO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y LA LEY DE ORDENACION UNIVERSITARIA DE 1943

Iniciada la nueva política educativa con Pedro Sáinz Rodríguez antes de que se terminara la guerra, apenas terminada ésta e iniciada la gestión ministerial de Ibáñez Martín se publicó una Ley que si no se refería directamente a la Universidad iba a tener una extraordinaria resonancia en la vida universitaria. Me refiero a la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La actividad del Consejo era mucho más amplia que la acción investigadora de la Universidad. Con la creación de este nuevo Organismo se pretendía coordinar la acción investigadora que pudiera realizarse en cualquier institución española, por supuesto en la Universidad, pero también en aquellas otras entidades que dependiendo de otros Ministerios, tales como el de Industria, el de Justicia o los Ministerios militares e incluso la acción investigadora que entidades distintas que las del Estado, la Iglesia, por ejemplo, pudieran realizar. El Consejo, por su carácter es una Institución distinta de la Universidad, pero la realidad es que las actividades del Consejo fueron orientadas y dirigidas principalmente por profesores de la Universidad. Por otra parte, dentro del Consejo se formaron en la actividad investigadora muchos jóvenes que posteriormente habrían de ir a realizar funciones docentes en las instituciones universitarias.

En el ambiente general de aceptación del Consejo de Investigaciones Científicas no faltaron voces disonantes en afirmar ser un mal para la Universidad, ya que al destinar medios materiales y esfuerzos personales a la nueva Institución se empobrecería la Institución universitaria. Pero la verdad es que la investigación desborda el ambiente puramente universitario, y por otra parte, debido a los vínculos personales y también en casos concretos a los vínculos institucionales entre entidades del Consejo y Facultades o Centros universitarios la vida de la Universidad en conjunto resultó apoyada y fortalecida por el Consejo de Investigaciones Científicas.

Pero donde alcanzó una proyección más concreta de la política en relación con la Universidad fue en la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943.

La Ley se plantea el problema completo de la Universidad desde sus fines, funciones y personalidad jurídica hasta los órganos para el ejercicio de las funciones primordiales universitarias con las disposiciones relativas al gobierno, al profesorado, a los estudiantes y a la organización de medios didácticos y recursos económicos. Todo lo que de modesto tenía en sus aspiraciones el Decreto Ley que durante la Dictadura se promulgó en 1928 sobre la reforma de algunos aspectos de la vida universitaria tiene de aspiraciones de grandeza la Ley de Ordenación Universitaria de 1943. Dejando aparte lo que pueda haber de fronda retórica en la parte expositiva de la Ley y los detalles concretos relativos a la organización de la vida universitaria, se pueden señalar algunos rasgos característicos de la reforma que supone la Ley. El ministro Ibáñez Martín al presentarla para su aprobación en las Cortes dijo que lo esencial de la reforma radica «de una parte en el fortalecimiento de las viejas funciones universitarias» o de otra «en la creación de

nuevos órganos que respondan a las exigencias del momento histórico que vivimos». Traducidas estas palabras al lenguaje corriente quieren decir que en la Ley de Ordenación Universitaria se pretendía dar una educación integral a los estudiantes formándolos «para la vida humana» además de prepararlos para el cultivo de la ciencia y el ejercicio de la profesión, todo ello a través de unas enseñanzas inspiradas en el «sentido católico consustancial a la tradición universitaria española» por lo que todas las enseñanzas deben acomodarse a las del Dogma y de la Moral Católicos. Las exigencias de los tiempos pueden considerarse de una parte políticas, emanadas del nuevo estado que se estaba construyendo y de otra parte profesionales exigidas por el desarrollo de la técnica y de la vida en la sociedad en cuyo seno la Universidad está inserta.

Para hacer realidad las nuevas orientaciones que se acaban de señalar en la Ley se prescribe la restauración de Colegios Mayores para que en ellos se realice la labor formativa que a la Universidad compete y que vendrá a complementar la acción docente e investigadora que en las Facultades se realice. Se establece la posibilidad de organizar Institutos y Escuelas de Formación Profesional así como Institutos de Investigación Científica en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Igualmente se crea el Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria. Se hace obligatoria la enseñanza de la Religión para lo cual se pondrán de acuerdo el Ministerio de Educación Nacional y la Iglesia. También se implanta la obligatoriedad de la educación física y la formación política que se encomienda a los Organismos de Falange. Posteriormente, y como aplicación de la Ley, se promulgaron los correspondientes decretos de Ordenación de las actividades de las distintas Facultades. Es de señalar que con la Ley de 1943 se inicia la creación de nuevas Facultades universitarias. La Facultad de Veterinaria se crea en la misma Ley; posteriormente seguirían las Facultades de Ciencias Políticas y Económicas que más adelante se seguirían subdividiendo. De acuerdo con la Ley los profesores quedaban encuadrados en el servicio español del profesorado de F.E.T. y de las J.O.N.S. y los estudiantes en una Asociación única el Sindicato Español Universitario.

¿En qué medida se hizo eficaz la nueva política universitaria caracterizada por las notas que acaban de ser destacadas? Con la Ley de 1943 la Universidad entró en una nueva modalidad que representó sin duda ninguna un progresivo enriquecimiento de los estudios universitarios y de la investigación científica. Pero ya en el momento de la aprobación de la Ley en las Cortes salió a relucir el eterno factor económico que tantos proyectos educativos ha hecho fracasar. Según parece la Ley se aprobó con el voto de todos los procuradores presentes salvo el del profesor Juan Francisco Yela Utrilla que votó en contra dando como razón que la Ley no sería eficaz mientras a los profesores de la Universidad no se les asignara un sueldo de 60.000 pesetas. Bien entendido que se trataba de 60.000 pesetas anuales; por entonces el sueldo de un catedrático de Universidad andaba por las 10.000 al año. También se ha de señalar el fracaso de aquellas enseñanzas cuya obligatoriedad estableció la Ley y que no estaban destinadas a la formación científica del universitario, sino más bien a su formación humana y sobrenatural: la Educación Física, la Formación política y la Formación religiosa que, en efecto, se establecieron en todas las Universidades pero con tan escasa eficacia que con el tiempo llegaron a ser llamadas «las tres Marías», tres enseñanzas que los estudiantes tomaron a broma por la falta de acierto en su planteamiento y desarrollo.

Pero el principal problema que había de resolverse para hacer realidad la reforma era el del profesorado universitario. Como consecuencia de la guerra bastantes profesores se habían exiliado y por otra parte la población estudiantil iba creciendo en la Universidad. En la solución de este problema prestó un gran servicio el Consejo de Investigaciones Científicas que con una política de becas para que jóvenes recién graduados se iniciaran en la investigación, contribuyó a crear núcleos de jóvenes investigadores, llenos de ilusión por la tarea científica, alrededor de quienes antes de la guerra tenían ya un buen ganado prestigio científico y que continuaron su labor en España. De estos núcleos se fue nutriendo el profesorado de la Universidad española. No es aventurada la afirmación de que la mayor parte de los que se incorporaron como profesores a la Universidad fueron con anterioridad becarios o colaboradores en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La condición impuesta por la Ley de presentar un trabajo científico escrito expresamente para la oposición y el haber realizado función docente o investigadora

efectiva durante dos años evitó el riesgo de acceso prematuro y precipitado a las cátedras de la Universidad. Desdichadamente, el rendimiento del profesorado en la Universidad decayó en razón de la eterna dificultad económica. Ante un coste de vida creciente las retribuciones del profesorado se fueron haciendo cada vez más insuficientes. Para resolver este problema, en el presupuesto del Estado correspondiente a 1946 se autorizó a los catedráticos universitarios para que ejercieran otras funciones públicas, haciendo compatible la percepción de retribuciones por unas y otras actividades. Acogiéndose a esta autorización que fue regulada por Orden de 21 de febrero de 1946 bastantes catedráticos de Universidad que antes lo habían sido de Institutos o habían pertenecido al cuerpo de bibliotecarios empezaron a simultanear algunas de estas funciones con la docencia en la Universidad. Esto significó, naturalmente, una disminución en la dedicación a tareas específicamente universitarias.

5. EL QUIEBRO DE LA POLÍTICA UNIVERSITARIA.—NUEVAS PERTURBACIONES

La política universitaria se quebró en 1951 cuando Ibáñez Martín fue sustituido en Educación Nacional por Joaquín Ruiz Giménez. A lo largo de toda la actuación ministerial de Ibáñez Martín, doce años de gestión, se percibe como un propósito decidido de hacer ciencia y educación «nacional» en el doble sentido de la palabra: una ciencia y una educación realizadas por españoles y una ciencia y una educación enlazada con la tradición católica de la historia de España. Una política educativa «católica y española» con todos los valores positivos que esta expresión se encierra y con todas las posibles derivaciones limitativas con que algunos interpretan estos rasgos. Esto no quiere decir que la actividad científica estuviera encerrada en los límites geográficos de España, sin contacto con el exterior; muy al contrario, durante los años de aislamiento diplomático español se puede afirmar que casi los únicos canales entre España y el resto del mundo eran los establecidos por el Consejo de Investigaciones Científicas que mantuvo una relación estrecha y nunca interrumpida con las principales entidades científicas y universitarias del mundo occidental. Vossler, Fleming y Waksman fueron, entre otros, Doctores «honoris causa» por la Universidad de Madrid, honor que aceptaron bien complacidos y que pone de relieve la existencia de relaciones científicas entre España y el extranjero. La situación y la política general de España, de reconstrucción de un país devastado por la guerra y de afirmación de su independencia frente a presiones exteriores favorecían la política de una educación «española» en el sentido que esta palabra tiene por los años 40.

El tránsito de Ibáñez Martín a Ruiz Giménez no fue simplemente una entrega de poderes sino que junto a ella se dio una especie de confrontación de ideas y de personas. La obra más importante de Ibáñez Martín, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del cual fue primer presidente, continuó siendo dirigida por Ibáñez Martín aún cuando éste había dejado ya la cartera de Educación. ¿Aceptó Ruiz Giménez de buen grado que siguiera Ibáñez Martín como presidente del Consejo de Investigaciones Científicas? Las «Gentes enteradas» que siempre hay cuando se trata de un tema sabroso, dijeron que no; que tuvo que aceptar esta condición para ser nombrado ministro de Educación, más ¿podía un ministro de Educación dejar que el Consejo actuara por su cuenta con independencia de la política del ministro? También parece que hay que dar una respuesta negativa a esta cuestión. Para armonizar las dos situaciones contradictorias se llegó a un arreglo en el cual se establece una presidencia efectiva del Consejo bajo la superior presidencia del ministro. En resumen: dos sillones presidenciales. Y como quien tiene el poder, en definitiva, el dinero, es el ministro, el que sale perdiendo es el Consejo que, en efecto, vio mermadas sus atribuciones y sus posibilidades en tiempo de Ruiz Giménez.

La política de un nuevo equipo ministerial en relación con la Universidad es un tanto difícil de enjuiciar. Por una parte se inició una actitud, que pudiéramos llamar de apertura hacia nuevas ideas y nuevas personas, dejando, al menos en apariencia el Ministerio algo de sus atribuciones discrecionales y traspasándoselas a la Universidad. En concreto, si de algún modo pudiera decirse que la vida universitaria en tiempos de Ibáñez Martín transcurrió bajo el magisterio «espiritual» de Menéndez Pelayo con Ruiz Giménez ese magisterio se trasladó a Ortega y Unamuno. Si en tiempos de Ibáñez Martín los tribuna-

les de oposiciones a cátedras eran nombrados por el Ministerio en tiempo de Ruiz Giménez se estableció que tres de los vocales del tribunal fueran nombrados automáticamente entre los pertenecientes al escalafón de catedrático. Frente a esta actitud liberalizadora se fortaleció la acción del S.E.U. y de otros organismos de F.E.T. y de las J.O.N.S. y se promulgó por Decreto de 8 de septiembre de 1954 el reglamento de disciplina académica de los centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, reglamento en el cual se tipifican las faltas de los profesores y de los estudiantes y se establecen procedimientos para sancionarlas, de entre los cuáles la primera que se menciona como falta grave es las manifestaciones contra la religión y la moral católicas o contra los principios e instituciones del Estado mencionándose también como falta grave la incitación o estímulo dirigida a la perturbación del régimen académico normal o sindical. Si a esto se añade que en las disposiciones finales se menciona la posibilidad de que impongan sanciones no sólo el Ministerio de Educación Nacional sino también el Sindicato Español Universitario y que con carácter subsidiario serán aplicadas las disposiciones de carácter disciplinario del Reglamento General de Funcionarios Públicos se puede tener una idea del carácter represivo de este Decreto.

Con independencia de las disposiciones oficiales que concretan la política del Ministerio, las manifestaciones, a veces no afortunadas, de hombres muy representativos en la situación del momento crearon un clima de insatisfacción entre buena parte del profesorado.

Por otra parte, el S.E.U. de origen falangista y encuadrado entre las organizaciones de F.E.T. y de las J.O.N.S fue dominado por las nuevas corrientes ideológicas de signo liberal, anarquizante y socialista convirtiéndose en un elemento de perturbación universitaria que dio al traste con el Ministerio de Ruiz Giménez.

En el terreno de la estricta actividad académica se puede señalar también que en esta etapa ministerial el problema económico del profesorado se intentó solucionar por la vía de remuneraciones especiales según fuera la dedicación del profesor a la cátedra. En esta línea de pensamiento se distinguió entre lo que es dedicación **normal**, constituida únicamente por las explicaciones de cátedra, y la dedicación **plena** que incluía no sólo la acción docente en sentido estricto sino también otras actividades y sobre todo permanencia durante determinado tiempo en la Universidad. El principio de retribuir de acuerdo con la actividad efectiva es inatacable en teoría; pero de hecho respondía más bien a un concepto negativo, de suerte que el profesor que no hiciera nada fuera de la Universidad y que en la Universidad cumpliera administrativa o formalmente con el horario de clases tenía derecho a la máxima retribución mientras que el profesor que además de sus clases tuviera una actividad investigadora que se reflejara en publicaciones, conferencias, asesoramientos o cualquier tipo de actividad científica veía obstaculizada la posibilidad de obtener una remuneración adecuada.

6. LAS ENSEÑANZAS TECNICAS

En 1956 se hizo cargo de la Cartera de Educación Nacional Jesús Rubio y García-Mina. En los medios universitarios se atribuyó a la gestión de Rubio un carácter pacificador. Caído Ruiz Giménez a consecuencia de los desórdenes estudiantiles y del clima de insatisfacción en la Universidad, la opinión más corriente es que la principal tarea de Rubio era la de llevar la tranquilidad, al menos en el aspecto externo, a la vida universitaria. Y esta misión, sin duda ninguna, la cumplió el nuevo titular del Ministerio. Pero ésto no quiere decir que no tuviera otras preocupaciones o problemas.

En el completo repertorio de Leyes Fundamentales de Educación promulgadas durante la gestión ministerial de Ibáñez Martín, las enseñanzas técnicas fueron abordadas de un modo muy restringido en la Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional uno de cuyos objetivos es la iniciación de los alumnos en las modernas técnicas profesionales.

De acuerdo con la Ley que acaba de mencionarse se crearon los Institutos Laborales pero las instituciones que venían de antes dedicándose a la formación técnica, es decir, las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos, así como las de Peritos y Aparejadores no fue-

ron afectadas. Las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos venían tradicionalmente desarrollando una labor de formación técnica de alto nivel pero que alcanzaba a muy pocos alumnos por el carácter restrictivo del ingreso de estudiantes en las mencionadas Escuelas.

En la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas de 20 de julio de 1957, se encuentra lo que puede considerarse un acercamiento de las Escuelas Técnicas Superiores a la vida universitaria. Administrativamente, las Escuelas Técnicas no pertenecen a la Universidad pero sin duda alguna son instituciones de Enseñanza Superior que en muchos países están incluidas en las instituciones universitarias. Con esta Ley no se convierten en instituciones universitarias estrictamente hablando, pero sin embargo, se introduce el acceso a las Escuelas Técnicas mediante cursos selectivos, sistema que sustituye a los tradicionales exámenes de ingreso y cuya eficacia, se dice en la presentación de la Ley, ha sido probada ya en la Enseñanza universitaria. Igualmente se establecen actividades semejantes a las de la Universidad prescribiendo la Organización de cursos de información y perfeccionamiento para graduados, así como del establecimiento de cátedras especiales y seminarios, laboratorios de investigación técnica y cooperación industrial que permitirán a las Escuelas cooperar activamente en el desarrollo económico del país.

En general, la vida universitaria en la segunda mitad de los años 50 transcurrió sosegadamente en el orden externo y sin modificaciones importantes en los planes y realización de los trabajos. Pero el S.E.U., única organización estudiantil permitida entonces, se fue deteriorando cada vez más. En los estudiantes iba tomando cuerpo la idea de la representatividad en su propia organización. Una actitud de resistencia se iba extendiendo mientras en la que en la dirección misma de la organización iba progresando la influencia de ideas y actitudes opuestas a la política oficial del gobierno mientras los mandos nacionales, nombrados directamente por las autoridades del Partido, se sentían impotentes para establecer una disciplina eficaz en la masa estudiantil. En ocasiones los mismos mandos se dejaron llevar de una acción demagógica en la que se pretendía aglutinar a los estudiantes enfrentándolos con los profesores. Incluso en un acto solemne de apertura de curso el jefe nacional del SEU, que intervenía en nombre de los estudiantes, habló indiscriminada, pero explícitamente, de la falta de vocación del profesorado. De nuevo se empezaba a desarrollar en la Universidad un ambiente de malestar al cual contribuía no poco la escasez de medios con que se contaba para realizar una acción docente y formativa decorosa con el contingente de estudiantes que empezó a crecer de una manera vertiginosa.

7. LA MASIFICACION DE LA UNIVERSIDAD

En julio de 1962 fue nombrado ministro de Educación Nacional el Profesor Lora Tamayo. Era hombre bien conocido en los ambientes científicos. Durante muchos años había sido Vicerrector de la Universidad de Madrid, Director del Instituto de Química del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Secretario y verdadero animador del Patronato Juan de la Cierva de investigación científica y técnica del mismo Consejo de Investigaciones. Hombre con historial científico pero no político parece que habría de orientar su gestión ministerial principalmente a la renovación de la vida universitaria cuya organización no se acomodaba a las nuevas exigencias de la ciencia y de la técnica y a revitalizar el Consejo de Investigaciones Científicas que llevaba una vida más bien lánguida. Y así fue.

Dejando aparte su intento de hacer más eficaz el Consejo de Investigaciones, modificando su organización, en la Universidad hubo de enfrentarse con tres problemas fundamentales:

El de los disturbios estudiantiles que volvieron a aparecer ahora apoyado por un número aunque pequeño de profesores.

El problema de la afluencia multitudinaria de estudiantes, especialmente en la Univer-

sidad de Madrid, en tal número que desbordaban con mucho las posibilidades de atención semidecorosa.

El problema de una organización en exceso rígida y atrasada de las actividades universitarias inadecuada frente a las exigencias de la ciencia y la técnica en aquellos momentos.

El reglamento de disciplina promulgado por Ruiz Giménez fue aplicado a los profesores que encabezaron la perturbación universitaria. Tres de ellos, dos de la Universidad de Madrid y uno de Salamanca, fueron separados definitivamente del servicio y algunos otros recibieron sanciones menores. Esta medida parece que bastó para aplacar, al menos externamente, la acción perturbadora de los profesores. Los disturbios estudiantiles continuaron y frente a ellos se tomaron dos medidas que tampoco resultaron eficaces. En primer lugar, el SEU, como asociación pública de estudiantes dejó de existir y en su lugar se dictaron unas normas para la constitución de Asociaciones de estudiantes en las que todos los puestos directivos habrían de ser elegibles. Pero ya los estudiantes no estaban en actitud de aceptar cualquier disposición que viniera de la superioridad; más bien había una actitud generalizada de resistencia a cualquier ordenamiento que de arriba viniese por lo cual las Asociaciones nacidas de acuerdo con la disposición ministerial tuvieron una vida efímera y a la postre desaparecieron. Por otra parte se vió también que la presencia de la fuerza armada en el campus universitario, aunque no entrara en los edificios, no servía para acabar con las perturbaciones; antes bien, servía para irritar a la población estudiantil fortaleciendo la actitud de resistencia frente a la autoridad. Esta situación se intentó remediar creando una policía especial universitaria, semejante a la que existe en otras universidades del extranjero. Pero igualmente esta medida resultó ineficaz y las perturbaciones continuaron tomando un cariz agresivo no sólo frente a la autoridad académica sino frente al profesorado en general. Sin que sea menester dar resonancias dramáticas a las palabras sí puede decirse que se creó un abismo de separación entre estudiantes y profesores.

La afluencia de estudiantes a la Universidad de Madrid, dado que la sociedad española no estaba dispuesta a aceptar la limitación de ingreso, el aborrecido «*numerus clausus*», se pretendió evitar prohibiendo a los estudiantes matricularse en otra Universidad distinta de aquella a cuyo distrito perteneciera el centro donde hubiera realizado el curso preuniversitario. Con esta disposición se pretendía detener el aluvión de estudiantes que cada año viene de otras provincias españolas a la Universidad de Madrid. Naturalmente, había de hacerse la excepción de aquellas carreras que no pudieran ser cursadas más que en la Universidad de Madrid; tal por ejemplo, en aquel entonces los estudios de Economía y de algunas Secciones de las Facultades de Ciencias y Letras. Esta disposición no fue bien recibida por lo que tenía de restrictiva y de atentatoria contra la libertad de un estudiante para elegir el centro español en el cual quisiera cursar sus estudios. De toda suerte resultó ineficaz y la Universidad de Madrid siguió masificándose sin cesar. Se me perdonará la pedantería de decir que el camino para impedir la masificación lo señalé en un artículo publicado en el «ABC» del 28 de noviembre de 1964 en el cual hablaba de que no había otra solución sino la de crear otras Universidades, incluso nuevas Universidades, en la misma población «¿es tan grave —así terminaba el artículo— el que en la capital de España en lugar de una Universidad gigantesca haya dos, tres o cuatro Universidades oficiales o privadas, que de verdad puedan no sólo impartir la enseñanza de rango superior sino también ofrecer a sus estudiantes posibilidades de una auténtica y eficaz vida universitaria. Si asusta el pensar en varias Universidades dentro de Madrid quizá sea más acedero duplicar o multiplicar Facultades; tanto da; lo importante es no creer que una Universidad puede llegar más allá de lo que sus medios permiten». Posteriormente el Director General de Universidades del Ministerio Lora habló de la posibilidad de crear alguna nueva Universidad en Madrid; pero de hecho el camino fue emprendido por el ministro Villar Palasí que inició las dos salidas apuntadas en mi artículo: crear nuevas Universidades en Madrid y desdoblar Facultades de una misma Universidad.

El problema de la inadecuación de la estructura de la Universidad, las exigencias de la ciencia y de la técnica fue planteado e intentado resolver con la Ley de 17 de julio de 1965 que modificaba la reordenación Universitaria de 1943, estableciendo una nueva unidad de estructura universitaria con el nombre de Departamento y definiendo una nueva figura de profesor, la de «profesor agregado». Esta Ley con la que no se pretende una innovación radical en la vida universitaria marca sin embargo un paso importante en la evolución de la Universidad. Con el Departamento se da estado oficial a una necesidad que venía siendo sentido en la vida universitaria, la docencia y la investigación en equipo, necesidad, y de nuevo pido perdón por la pedantería que señalé en un artículo publicado también en «ABC» el 28 de octubre de 1964. La figura del profesor agregado como un nivel inferior al de Catedrático pero ya dentro del profesorado numerario era también una necesidad porque venía resultando excesiva la distancia entre el Catedrático, Profesor vitalicio con todos los derechos y el Profesor adjunto, un profesor temporal cuya vida académica en definitiva dependía del criterio del Catedrático.

En la presentación del proyecto de Ley a que se acaba de aludir se decía que «su aplicación a de ser gradual en el ámbito y en el tiempo». Por lo que a la figura del Profesor agregado se refiere la Ley tuvo eficacia casi inmediata. Una vez publicada ya se empezaron a crear plazas de Profesor agregado y al cabo de pocos años vino a constituir este nivel la puerta de entrada para el profesorado numerario. En cambio, la realidad del Departamento todavía es cosa no lograda; tal vez ella se deba a que por la dificultad de establecer una coordinación efectiva entre personas y actividades que venían desenvolviéndose aisladamente o tal vez también porque choca con los viejos conceptos de Facultad y de Sección como unidades estructurales. Y no porque necesariamente el Departamento sea incompatible con la existencia de Facultades e incluso de Secciones sino porque la infraestructura administrativa, es decir, la atribución de un personal auxiliar y subalterno es condición indispensable para que un Departamento funcione; y esta condición se ha cumplido en muy pocos casos.

8. LA LEY GENERAL DE EDUCACION DE 1970

En 1968, Lora Tamayo fue sustituido por José Luis Villar Palasí como ministro de Educación y Ciencia. Apenas el nuevo equipo ministerial relevó al anterior planteó el problema de la reforma total de la educación. La necesidad de una Ley de Bases de la Educación que comprendiera todos los niveles y modalidades de la educación fue proclamada como la conclusión primera del tercer Congreso Nacional de Pedagogía celebrado en Salamanca en 1964. En la etapa ministerial de Lora se hicieron eco de esta necesidad y se llegó a constituir una comisión preparatoria de esta Ley de Bases para la que el entonces Subsecretario de Educación se preocupó de recoger opiniones, entre ellas las de la Sociedad Española de Pedagogía y el Instituto de esta misma especialidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero no pasó de un propósito apenas conocido. El equipo de Villar Palasí planteó inmediatamente el problema de la reforma educativa y dentro de ella, naturalmente, el problema de la Universidad.

En la vida universitaria se había iniciado una ligera modificación con la introducción del concepto de Departamento y la nueva figura del profesor Agregado establecida por la Ley antes aludida de 1965. Pero la vida universitaria se iba haciendo cada vez más difícil. Las perturbaciones de la vida académica eran cada vez más frecuentes. Carteles y panfletos de todas las tendencias revolucionarias, para cada una de las cuáles había su grupo o grupo correspondiente, invadieron la Universidad. Las ocupaciones de Cátedras, agresiones verbales y a veces de obra a los profesores, huelgas de diversas características hicieron que la vida universitaria se convirtiera en una preocupación nacional. A ello contribuía, si no una campaña, sí frecuentes alusiones al profesorado numerario como la causa principal de la anormalidad universitaria y en especial al profesorado vitalicio como una rémora para la necesaria renovación.

En el ambiente que se acaba de mencionar se promulgó la Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Dentro de ella se establecen cambios sustanciales en la Universidad. En primer lugar recoge la innovación introducida por la Ley de Lora en cuanto a los Departamentos si bien les da una definición más precisa como «unidades fundamentales de enseñanza y de investigación en disciplinas afines que guarden entre sí relación científica», confiriéndoles la responsabilidad de las correspondientes enseñanzas «en toda la Universidad». Tal vez la modificación fundamental en la estructura universitaria esté en el establecimiento de tres ciclos:

Un primer ciclo destinado al estudio de disciplinas básicas, con una duración de tres años.

Un segundo ciclo de especialización con una duración de dos años.

Un tercer ciclo de especialización concreta y de preparación para la investigación y la docencia.

Con una formación profesional complementaria el estudiante que haya cursado el primer ciclo de enseñanza universitaria puede adquirir el primer título universitario, el de Diplomado. Los otros dos ciclos desembocan en la obtención del título de Licenciado del segundo, y en el de Doctor del tercero. La innovación como se ve está en la introducción del primer ciclo y del título de Diplomado.

Aparte de los tres ciclos mencionados que se pueden cursar en las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, en la Ley General de Educación se establecen las Escuelas Universitarias en las que se imparte un sólo ciclo, con una duración de tres años con el cual se desemboca en la obtención del título de Diplomado universitario al cual irán anejos determinados derechos de índole profesional.

Otra novedad de la Ley es el establecimiento de Colegios Universitarios en los cuáles se puede cursar el primer ciclo de enseñanza universitaria semejante en un todo al que se curse en Facultades o Escuelas Técnicas Superiores. Conviene no confundir estos nuevos Colegios universitarios con los Colegios Mayores Universitarios establecidos en la Ley de 1943 y que permanecen con sus funciones propias en la Ley de 1970.

Igualmente se dispone la creación en todas y cada una de las Universidades de los Institutos de Ciencias de la Educación a los que se encarga de «la formación docente de los universitarios que se incorporen a la enseñanza en todos sus niveles, del perfeccionamiento del profesorado en ejercicio y de aquéllos que ocupen cargos directivos, así como de realizar y promover investigaciones educativas y prestar servicios de asesoramiento técnico a la propia Universidad a que pertenezcan y a otros centros del sistema educativo».

Las Escuelas Técnicas Superiores y las Escuelas Técnicas de Grado Medio se incorporan a la Universidad, las primeras con un rango semejante al de las Facultades y las segundas convertidas en Escuelas Universitarias lo mismo que las Escuelas Normales y las de Comercio. Posteriormente, en Madrid, Barcelona y Valencia las Escuelas Técnicas Superiores y de Grado Medio constituyen la Universidad Politécnica de cada una de estas poblaciones. El resto de las Universidades tienen las Escuelas Técnicas incorporadas.

En cuanto al profesorado, manteniendo la figura del Catedrático, tradicional, y la del Profesor agregado definida en la Ley de 1965 se da en la Ley de 1970 una nueva categoría al profesor adjunto ya que se exige el grado de Doctor para obtener esta condición y se le constituye en Profesor numerario.

El acceso a la Universidad para la cual es preceptiva la realización de un curso de Orientación Universitaria, significa también una innovación dado que el mencionado curso

ha de ser programado y supervisado por la Universidad y realizado en los Institutos y Centros de Bachillerato lo cual implica la necesidad de una colaboración estrecha entre la Universidad y los Centros de Educación secundaria.

Siete años de vigencia de la Ley son pocos para enjuiciar su eficacia, máxime si los legisladores fueron tan prudentes como para establecer un plazo de diez años hasta su aplicación concreta. Por otra parte, cualquier reforma, requiere un ambiente adecuado en quienes han de hacerla efectiva. Y el ambiente universitario no era el más adecuado para estudiar y aplicar con sosiego una nueva Ley.

9. LA INQUIETUD DE LOS PROFESORES

Ya se han mencionado las perturbaciones estudiantiles que dificultaban cualquier actividad eficaz. En los primeros años 70 no sólo se agravaron sino que se extendieron al profesorado no numerario. El crecimiento extraordinario en el número de alumnos de la Universidad exigía paralelamente un crecimiento en el número de profesores. Pero el aumento de profesores ofrecía dos dificultades grandes: de una parte la dificultad de preparar con la rapidez necesaria un profesorado suficientemente idóneo y de otra parte, la dificultad de disponer de los medios económicos para pagar decorosamente a los profesores viejos y nuevos. A estas dos dificultades objetivas, se añadió incomprensiblemente el hecho de no aumentar, o de aumentar la cantidad mínima, el profesorado numerario, mientras hubo de aumentarse extraordinariamente el número de profesores no numerarios hasta llegar a la situación curiosa de que es mucho mayor el número de enseñanzas a cargo de profesores temporales que el de enseñanzas a cargo de profesores permanentes. La lentitud en nombramientos y pago de salarios, la escasez de las retribuciones y la inseguridad del mismo profesorado no numerario que cada año se enfrentaba con la necesidad de que se le repitiera el nombramiento y con el riesgo de que no se le repitiera, crearon una situación de malestar que llegó a la curiosa situación de que el curso de 1972-73 se vio más perturbado por la actitud de los profesores no numerarios que por la actitud de los estudiantes.

Es importante, o al menos curioso anotar que en la Ley se otorna a las Universidades autonomía para que «puedan determinar por sí mismas los procedimientos de control y verificación de conocimientos, el cuadro y el sistema de sus enseñanzas y su régimen de docencia e investigación dentro de las disposiciones de la presente Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo».

El Estatuto que cada Universidad tendrá singularmente, según también se prescribe en la Ley, concreta el régimen de actividad y autonomía de que las Universidades gozarán. En este sentido, ocho años después de la promulgación de la Ley, la autonomía universitaria sigue siendo una bella expresión. Incluso las Universidades de Barcelona y Madrid vieron suspendidos por un año, sus Estatutos a pesar de que sólo tenían todavía carácter provisional. También la perturbación de la vida universitaria ha hecho imposible hasta ahora la participación de los estudiantes en el gobierno de la Universidad.

Aparte de las dificultades provenientes de la anormalidad universitaria tantas veces mencionada y del eterno problema de la insuficiencia de medios económicos quedan por resolver dos problemas estructurales de la Universidad:

La organización y acción efectiva de los Departamentos a la que ya se aludió al comentar la Ley del 65 y la definición precisa de los derechos y atribuciones profesionales que se otorgarán al título de Diplomado universitario.

El problema de los derechos profesionales atribuibles al título de Diplomado es dife-

rente según se trate de unas Escuelas universitarias u otras. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a la profesión docente parece que no habrá dificultad. Las antiguas Escuelas Normales han sido transformadas en Escuelas del Profesorado de Educación General Básica; por consiguiente, los Diplomados en estas Escuelas estarán habilitados para la enseñanza en las dos etapas de la Educación General Básica mientras que las enseñanzas de segundo grado tanto de Bachillerato como de Formación profesional serán atribuibles al título de Licenciado y las enseñanzas universitarias al título de Doctor. Pero la situación no está tan clara en otras Escuelas Universitarias, el ámbito profesional de cuyos títulos habrá de ser decidido y es muy probable que no pueda serlo sin roces, tensiones y protestas de un lado y otro.

10. LA TRANSICION

A partir de 1973 la vida universitaria va a entrar, como toda la sociedad española, en un período de expectación.

El país y la política se vio conmocionada profundamente por el asesinato del Presidente del Gobierno, Carrero Blanco, en diciembre de 1973. Unos meses antes se había hecho cargo de la Cartera de Educación y Ciencia don Julio Rodríguez de cuyo breve paso por el Ministerio apenas si se recuerda el intento de modificar el calendario académico universitario acomodándolo a los años naturales, empezando en enero y terminando en diciembre. La disposición no fue bien recibida y apenas en enero de 1974 se hizo cargo del Ministerio Cruz Martínez Esteruelas derogó el Decreto y las aguas volvieron a su cauce, al menos desde el punto de vista cronológico.

En los años 70 los problemas universitarios se iban agravando como consecuencia, entre otros hechos, de la enorme afluencia de estudiantes a las instituciones universitarias. El acceso a la Universidad estaba regulado en la Ley de 1970 a través del Curso de Orientación Universitaria cuya programación y supervisión correspondía a la Universidad y su realización a los centros de bachillerato. Nunca la Universidad supo hacerse cargo de las enormes posibilidades que tenía con el curso de Orientación Universitaria, no sólo para la orientación de los estudiantes, sino también, secundariamente, para la selección de sus propios alumnos. La consecuencia real de la implantación del curso de orientación universitaria fue el incremento enorme de estudiantes que podían ingresar con lo cual la masificación de la Universidad era un hecho cada vez más inquietante.

El más llamativo problema de la Universidad en estos años se halla vinculado al ingreso de los estudiantes que en algunas Facultades, especialmente en las de Medicina, ha sido fuente de numerosos conflictos. En la Ley General de Educación se concede a los estudiantes el derecho de elegir el «Centro docente más adecuado a sus preferencias» (artículo 125), pero establece la condición de que existan plazas disponibles. Ante la posibilidad de que en un determinado centro las peticiones de ingreso superen al de plazas disponibles, las Facultades estaban autorizadas a establecer sus propias pruebas de selección siempre que fueran autorizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. En lugar de hacer uso de esta posibilidad que a las Facultades se les ofrecía, el ministro Martínez Esteruelas promovió y llevó adelante la promulgación de una «Ley de acceso a las Facultades y Centros Universitarios» según la cual las pruebas de ingreso estarían establecidas no por las Facultades que tuvieran necesidad de ello sino por la Universidad en conjunto con lo cual el problema de la selección de estudiantes se agravó ya que en la nueva Ley no se ofrecían posibilidades de que el ingreso de los estudiantes estuviera atemperado a las posibilidades de cada Facultad. La llamada Ley de Selectividad en lugar de resolver vino a agravar el problema. Debe decirse, en descargo del ministro Martínez Esteruelas, que recibió el aliento y el apoyo de casi todas las instituciones universitarias y de sus profesores, salvo algunas contadas, contadísimas, excepciones que desde el

primer momento dijeron que esta Ley era inútil. Posteriormente se han modificado estas disposiciones pero el problema sigue fundamentalmente el mismo.

Dentro de la política de discontinuidad que supone el que unos ministros se olviden de lo que han hecho los anteriores es menester traer aquí el recuerdo de los breves meses del Ministerio de Carlos Robles y Piquer que ocupó la Cartera de Educación durante la primera mitad del año 1976 y en la cual tomó una decisión, una de las pocas verdaderamente razonables, de crear una comisión para evaluar los resultados de la Ley General de Educación que había despertado vivas polémicas en el profesorado y respecto de la cual existían bastantes dudas y reticencias. Desdichadamente, cuando la citada comisión completó su trabajo, plasmado en tres gruesos volúmenes mecanografiados, Carlos Robles ya no era ministro. Los trabajos de esa comisión fueron olvidados y la Universidad siguió estando a la expectativa.

El Gobierno constituido a raíz de las elecciones de 1977 introdujo la figura del **Secretario de Estado**, nombrándose uno para las Universidades. Desde entonces se empezó a hablar de una nueva Ley universitaria y en los llamados «círculos bien informados y allegados a las fuentes ministeriales», se habla de proyectos y anteproyectos, rectificaciones y consultas cuyo resultado hasta el momento ha sido alargar el compás de espera de la Universidad, que todavía, a los ocho años de haberse promulgado la Ley de Educación tiene sin estructurar el tercer ciclo de educación universitaria, el del doctorado, que en estos tiempos de masificación universitaria, se puede considerar que es el único que responde o puede responder a las exigencias de rigor en las tareas intelectuales.

Si después del recorrido que acaba de hacerse a las distintas manifestaciones de la política universitaria a lo largo de estos últimos cincuenta años, quisiéramos hacer un a modo de síntesis y caracterización general podríamos constatar en primer término que la dictadura de Primo de Rivera se encontró con una Universidad politizada y al cabo de cincuenta años la Universidad vuelve a estar politizada. Pero con una diferencia. Al final de los años veinte había enfrentamientos universitarios de raíz política, pero se aceptaba la institución universitaria en su estructura y finalidades básicas. Al final de los años setenta, se cuestiona, y se rechaza por muchos, la misma Universidad.

Hoy se puede afirmar sin grave riesgo de equivocación que la Universidad se enfrenta con graves problemas que arrancan de su carácter multitudinario, de la inadecuación de estructuras y métodos de trabajo; en el fondo de todo, está la **ausencia de identidad de la institución universitaria**, consecuencia esta última de los rápidos cambios sociales, científicos y técnicos. Junto al de su identidad, hay un problema que continuamente se plantea y replantea: el de la **autonomía**. Efectivamente, el problema de la autonomía suscitó las luchas políticas de la Universidad en los años veinte y la autonomía es uno de los problemas con los que se debate la Universidad al final de los años setenta.

Pero no nos engañemos. Si bien el de la autonomía es el problema que más veces aflora en las expresiones y protestas de profesores y alumnos ha de tenerse bien presente que la autonomía es condición, pero no causa o fundamento, de la calidad y eficacia de la vida universitaria. Sin autonomía es difícil que una Universidad tenga vida vigorosa y de calidad suficiente. Pero con autonomía puede también llevar una vida lánguida, porque la cuestión principal está en las aptitudes y actitudes de profesores y estudiantes.

En 1973 el Instituto de Ciencias de la Educación y el de Pedagogía del Consejo de Investigaciones conjuntamente publicaron un excelente trabajo sobre los problemas académicos del estudiante universitario. El trabajo se refiere a los estudiantes de la Universidad Complutense pero, dadas las características de esta Universidad, se puede considerar que representan de algún modo, no la situación actual de las Universidades españolas sino la situación a que se ven abocadas. He aquí los problemas que «detectan» los propios estudiantes. La falta de orientación de los alumnos, la acción despersonalizada

zadora de la masa universitaria, la escasa por no decir nula vinculación de los estudios, en tanto que teoría, a las actividades que deben ser orientadas por ellos y al mismo tiempo son suscitadoras de problemas, la falta de preparación para el trabajo en equipos, la escasa atención prestada a las tareas investigadoras en la propia Universidad y la falta de adecuada relación entre la vida universitaria y el mundo del trabajo. Aunque no podamos entrar en él, vale la pena mencionar el grave problema del paro universitario, fenómeno de estos últimos años que ensombrece y crispa la vida de los estudiantes y graduados.